

**Expediente Nro. quince mil quinientos once.**

**Número de Orden:\_\_\_\_\_**

**Libro de Sentencias nº\_\_\_\_\_**

En la ciudad de Bahía Blanca, Pcia. de Buenos Aires, a los veinte días del mes de Septiembre del año dos mil dieciocho, reunidos en su Sala de Acuerdos, los señores Jueces de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal -Sala I- del Departamento Judicial Bahía Blanca, Doctores Pablo Hernán Soumoulou y Gustavo Ángel Barbieri (art. 440 del C.P.P.) para dictar sentencia en la causa **I.P.P. Nro. 15.511/I** seguida a **"P.,R.A.; A.,S.H. y L.,R.J. POR LESIONES GRAVES CULPOSAS"** y practicado el sorteo pertinente (arts. 168 de la Constitución de la Provincia y 41 de la ley 5827, reformada por la Nro. 12.060), resulta que la votación debe tener este orden **Soumoulou y Barbieri**, resolviendo plantear y votar las siguientes:

### **C U E S T I O N E S**

**1ra.) ¿Es justa la sentencia apelada de fs. 774/795?**

**2da.) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar ?**

### **V O T A C I Ó N**

**A LA PRIMERA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. SOUMOULOU, DICE:** El señor Defensor Particular del coprocesado R.J.L., Dr. Rubén J. Diskin, interpone recurso de apelación a fs. 797/799 contra la sentencia dictada a fs. 774/795, por la Sra. Jueza Correccional Nro. Tres, doctora Susana González La Riva, que condenó a su asistido, como autor penalmente responsable del delito de lesiones graves culposas (art. 94, primer y segundo párrafo del C.P.), a la pena de quince mil pesos de multa e inhabilitación especial para ejercer la profesión de ingeniero electricista por el término de dieciocho meses, con más el pago de las costas procesales.

Considero así que el remedio fue interpuesto en debido tiempo y forma, conteniendo la indicación de los motivos de agravio y sus fundamentos, siendo

el pronunciamiento pasible de ser atacado por el medio elegido; de manera que resulta admisible (arts. 439, 441 –según ley 13.812- y 442 del C.P.P.).

Cuatro son los motivos de agravio. El primero de ellos se refiere a que no se ha acreditado la relación de determinación o nexo causal entre la inobservancia reglamentaria y las lesiones sufridas por la víctima.

Se desconoce los motivos por los que F. embistió el vallado metálico sin ninguna maniobra previa de desvío o frenado; de ahí que resulte incierta la verdadera causa del accidente.

Se duele también el señor Defensor de la calificación legal asignada en la instancia al hecho por el que viene condenado R.J.L., pues la figura agravada del segundo párrafo del artículo 94 del Código Penal no resulta aplicable al caso, desde que se trata de una sola víctima y el hecho no fue causado por la conducción de un vehículo.

Como tercer agravio señala el excesivo plazo fijado en la inhabilitación especial para ejercer su profesión el imputado, solicitando la reducción de la misma al mínimo legal.

Por último, se agravia del monto de la multa fijada en el máximo legal de la escala punitiva, pues en su opinión, habiéndose valorado atenuantes sin constatar la existencia de circunstancias agravantes, los quince mil pesos fijados como multa resultan desproporcionados, debiéndose fijar la misma en el mínimo legal de pesos un mil.

De otro lado, la sentencia también fue recurrida por el particular damnificado, J.A.F., con el patrocinio letrado del Dr. José Manuel Sáez, a fs. 803/817.

El recurso fue interpuesto en debido tiempo y forma, conteniendo la indicación de los motivos de agravio y sus fundamentos, siendo el pronunciamiento pasible de ser atacado por el medio elegido; de manera que resulta admisible (arts. 423, 439, 441 –según ley 13.812- y 442 del C.P.P.).

En ese sentido, los agravios del recurrente se encuentran dirigidos a cuestionar la absolución de los coimputados S.H.A. y R.A.P..

Respecto del primero, sostiene que la intervención del mismo y su posición de garante frente al hecho acaecido se desprende de distintas circunstancias probadas en la causa.

Señala entre otras, la propia declaración del procesado al momento de prestar declaración en los términos del artículo 308 del C.P.P., cuando reconoce expresamente haber concurrido personalmente a la obra a fin de inspeccionarla (fs. 271/273).

El informe de EDES S.A. de fs. 211/212 donde da cuenta de las personas que intervinieron en la obra.

En cuanto a los alcances de la intervención de EDES S.A., ellos resultan claramente advertibles a partir de la propia supervisión que se reservó para sí la empresa en la obra delegada a la subcontratista INTEL S.R.L..

Señala distintas circunstancias a partir de las cuales puede inferirse la responsabilidad de EDES S.A. en el hecho, por lo que considera erróneo suponer que la misma no tenía ningún control ni supervisión sobre la obra y/o sobre su contratista (INTEL S.R.L.), tal como se resuelve en el fallo impugnado.

Respecto del coprocesado R.A.P., su intervención en la obra se encuentra reconocida por él mismo en su presentación de fs. 288/291, donde señala haber intervenido durante la etapa del hormigonado de la calle, en representación de la firma EJ CONSTRUCCIONES.

Su intervención en la obra se extendía hasta tanto quedase el hormigón realizado en condiciones de ser abierto al tránsito, manteniéndose mientras tanto el vallado de la calzada. Sostiene el recurrente que ello descarta que al tiempo en que ocurriera el hecho lesivo, la intervención de EJ CONSTRUCCIONES hubiera finalizado como lo afirma la magistrada de grado.

En definitiva, discrepando con el pronunciamiento en crisis, afirma que tanto S.H.A. como R.A.P. tenían la obligación de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad dispuestas en la obra, al igual que R.J.L. y que a todo evento, en virtud de las falencias que presentaban aquellas, debieron revisar la confianza depositada en la firma INTEL S.R.L., adoptando medidas concretas para subsanar las irregularidades constatadas.

Por ello solicita la revocación de la sentencia que dispone la absolución de S.H.A. y R.A.P., condenándose a ambos también como autores del delito de lesiones graves culposas.

Conforme el orden expuesto de los recursos impetrados por las partes, me abocaré en primer término a dar tratamiento a los agravios deducidos por el señor defensor particular del imputado R.J.L..

Respecto a la primera objeción deducida por el Dr. Diskin, la misma no es de recibo.

Señala la defensa que no se encuentra acreditado en la causa la relación de determinación entre la violación del deber de cuidado y el resultado causado.

Para ello transcribe la siguiente conclusión a la que arribara la magistrada de grado: "...Entiendo que puede hallarse razón a lo sostenido por las defensas en lo relativo a que la iluminación de la Avda. Dasso, iluminaba también el vallado...".

En función de lo expuesto, se pregunta la defensa por qué razón la víctima embistió el vallado metálico, sin ninguna maniobra previa de desvío o frenado, cuando la iluminación existente en el lugar permitía advertir el mismo.

Me apresuro en señalar que la transcripción realizada por el recurrente es incompleta y no refleja la conclusión a la que arribara la sentenciante.

Es que a renglón seguido, la señora jueza "a quo" afirma respecto a aquella iluminación propia de la vía pública que en manera alguna, la misma suple las exigencias normativas de seguridad para la evitación de accidentes, haciendo especial hincapié en la falta de señalamiento de la obra, en directa relación a la ausencia de cartelería, balizas y vallado con elementos refractarios.

La inexistencia de dichos elementos no fue objeto de discusión, quedando centrada la misma al hecho de si la iluminación existente en el lugar, eximía la colocación de aquellos, cuestión que fuera respondida en forma negativa en la sentencia en crisis, conclusión que comparto plenamente.

Hago más por ello las afirmaciones vertidas por la señora jueza a fs. 785, último párrafo, en base a las cuales desestima los argumentos de la defensa y concluye que la iluminación existente en la Avda. Dasso en manera alguna eximía a los responsables de los trabajos que se realizaban en el lugar, de colocar la cartelería, balizas y vallado con material refractario que posibilitasen advertir fácilmente y con la debida antelación a quienes transitaban por el lugar, la existencia de obstáculos en la calzada, a fin de evitar accidentes como el que nos ocupa.

Las fotografías de fs. 10, 11, 12 y 33 ilustran la magnitud del obstáculo, dejando en evidencia que para ser sorteado el mismo debía tomarse la mano contraria de circulación. Semejante obstrucción en la calzada, no puede quedar sin advertencia de balizas, vallado refractario y cartelería correspondiente, que entre otras cosas, advierta con la debida anticipación, el desvío en la circulación.

La iluminación pública por eficiente que sea no deja de lado la adopción de aquellas medidas tendientes a advertir la existencia de obstáculos al tránsito y que bien ilustra la Ordenanza Municipal nº 12.827, artículo 3 cuando señala que: "...Toda interrupción u obstáculo al tránsito -vehicular o peatonal- motivada por la ejecución de los trabajos: será señalizada de día mediante letreros y señales reglamentarias y por la noche con luces de peligro".

Lo expuesto determina sin hesitación alguna que, el incumplimiento incurrido, resultó determinante en la producción del resultado lesivo.

Nada más para decir sobre el asunto.

Entrando al análisis del segundo motivo de agravio, entiendo que el mismo resulta procedente, pues la calificación legal asignada en la instancia al hecho, resulta errónea.

En efecto, no dándose los supuestos contemplados en el segundo párrafo del artículo 84 del C.P., texto según ley 25.189, la calificación legal debe ser la prevista en el artículo 94, primer párrafo del C.P., también según la ley citada, pues la víctima es una sola y el hecho no fue producido por la conducción de un vehículo por parte del imputado.

En virtud de lo anterior y teniendo en cuenta que la pena de inhabilitación especial dispuesta en la instancia de grado había sido fijada en el mínimo legal, corresponde ajustar la misma a la nueva calificación legal, por lo que se condena al encartado en lo que respecta a la inhabilitación especial para ejercer la profesión de ingeniero a un año (art. 84, primer párrafo del C.P., texto ley 25.189).

Por último, el agravio referido al monto de la multa no es de recibo, pues la existencia de atenuantes de responsabilidad y la ausencia de agravantes, fue ponderado en la sentencia impugnada para aplicar una pena menos gravosa a la prisión. Ello descarta cualquier violación de los arts. 40 y 41 del C.P.

De otro lado, no se ha aleado por parte de la defensa que ella resulte desproporcionada en relación con el injusto cometido por el causante o que la misma puede resultar inconstitucional.

Con estos alcances, finiquito el tratamiento del recurso interpuesto por la defensa técnica del coprocesado R.J.L..

Ahora bien, respecto al recurso deducido por el particular damnificado, el mismo ha de tener acogida parcial, pues resultan procedentes los agravios

invocados en lo concerniente a la responsabilidad penal del coprocesado S.H.A., no así los invocados respecto a R.A.P..

En prieta síntesis, la señora jueza "a quo" absolvió al ingeniero S.H.A. por considerar que sus funciones como supervisor de la obra se hallaban limitadas al contralor de la reparación de los conductores de electricidad, habiendo concurrido únicamente al lugar al inicio de los trabajos, con el objetivo de verificar que los mismos sean en el lugar precisado por EDES S.A., por lo que no estaba a su cargo, velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad en la vía pública, las que puso en cabeza del representante técnico de la firma INTEL S.R.L., a cuyo cargo estaban los trabajos pertinentes, en virtud de la contratación efectuada con dicha empresa.

No comparto la conclusión a la que arriba la señora jueza de la instancia.

Me explico. En el informe de fs. 211/212 remitido por la EDES S.A., se menciona al encartado como una de los dos personas que tuvieron intervención en la obra sobre la calle Dasso, indicando que el nombrado era para esa época supervisor de obras en la empresa.

Dicho informe, desmerece los testimonios brindados en el juicio por los ingenieros G.M. y M.R., quienes en mi opinión, pretendieron desvincular la responsabilidad de S.H.A. en el hecho, al sostener que en su ámbito de actuación profesional en la empresa, no se encontraba lo concerniente a supervisiones de obras de reparación, pues en estos casos intervenía la sección de mantenimiento, la que no estaba a cargo del encausado.

El aludido informe resulta contundente, pues allí se indica que únicamente intervinieron en la obra dos personas: el imputado y G.M..

De otro lado, S.H.A. en la declaración brindada en los términos del artículo 308 del C.P.P. y en lo que resulta de interés sostuvo: " ...la actuación mía fue una primera inspección y única en la cual se verificó que el punto de trabajo sea el

indicado por EDES...", relatando también en la misma oportunidad que: "...al momento de iniciar la rotura de asfalto se encontraba perfectamente señalizado con vallas, conos, cartelería de obra..." (ver fs. 271/273).

La responsabilidad de S.H.A. no se exime por el sólo hecho que luego de su participación primigenia a la que se refiere en su declaración, se haya dado intervención a la sección encargada de reparaciones, pues él mismo, según sus dichos, encontró perfectamente señalizada la obra y cumplidas las medidas de seguridad dispuestas; cuando ello no fue así.

Con su accionar, convalidó el incumplimiento de las medidas de seguridad que adoptó la firma INTEL S.R.L., estando bajo la órbita de EDES S.A. y en el caso de S.H.A., la supervisión de las mismas, conforme el protocolo de actuación acompañado a fs. 666/734.

Su responsabilidad no se encontraba limitada al ámbito de intervención demarcado en el fallo impugnado. No tengo duda que dentro del marco de actuación profesional del ingeniero S.H.A. en aquella oportunidad se encontraba también la relativa a la supervisión de las medidas de seguridad adoptadas en la ocasión por la firma INTEL S.R.L., pues ello viene impuesto por el protocolo de instrucciones de seguridad para el personal de las empresas contratistas, adjuntado a fs. 666/734.

Como bien lo señala el recurrente, EDES S.A. se reservaba las facultades de supervisión de los trabajos a realizar por las firmas contratistas, previendo expresamente en el protocolo mencionado la figura de SUPERVISOR ASIGNADO POR EDES S.A., definiendo como tal a "aquella persona perteneciente a EDES S.A., asignado como encargado de coordinar, controlar y supervisar todas las actividades inherentes a una determinada obra o trabajo a desarrollar por el CONTRATISTA" (ver fs. 669).



Las citadas instrucciones de seguridad para el personal del contratistas tienen como objeto "...desarrollar todas sus actividades laborales en el marco de adecuadas condiciones de seguridad, para que de esa forma se brinde la protección necesaria a los trabajadores propios y de terceros contratados, así como también a terceros externos a la relación contractual pero que pudieren verse afectados por los trabajos desarrollados..." (ver fs.669).

Respecto a trabajos a realizar en la vía pública, los mismos se llevarán adelante de manera que no constituyan peligro para la seguridad pública, debiendo adoptarse las medidas de seguridad pertinentes ( ap. 4.14, fs. 678).

Y en lo que concierne a medidas a adoptar durante la ejecución de la obra, particularmente redes subterráneas en zonas urbanas y suburbanas, señalizaciones en la calzada cuando los trabajos se realicen en la misma, en el ap. E (fs. 681) se indican las medidas de seguridad a adoptar para advertir los mismos, señalando entre otras que estimo relevantes, la colocación de balizas de luz roja, cartelería a una distancia no menor de 50 metros de distancia anterior al área de trabajo y conos, antes de la citada área con el fin de prevenir a los conductores de vehículos y guiar el tránsito.

A su vez, EDES S.A. se reserva para sí, la facultad de imponer sanciones y multas al contratista cuando incurra en incumplimientos de alguna de las obligaciones relacionadas con el citado protocolo de actuación ( ver fs. 691, ap. 10).

Lo expuesto descarta el argumento de la defensa relativo a que la empresa contratante de los trabajos (EDES S.A.), no se encontraba obligada a supervisar las medidas de seguridad adoptadas en el lugar por la firma contratista (INTEL S.R.L.) y corrobora mi afirmación, lo relatado por el testigo M. cuando afirmó que "...cuando el contratista no cumple con la señalización o limpieza, se le marca la deficiencia y si no cumple se le exige o se lo penaliza..." (ver acta de debate, constancia de fs. 756).

Y que la obra fue supervisada por EDES S.A., lo reafirma los dichos del testigo D., según constancia en el acta de debate a fs. 755 vta., cuando expresó que "...esa obra no fue controlada por la Municipalidad, que la controlaba la gente de EDES S.A...".

Ha quedado acreditado entonces, que la empresa EDES S.A. tenía como obligación y así lo hizo, supervisar los trabajos que realizaba la firma contratista -INTEL S.R.L.-, contralor que como se expuso no se limitaba únicamente a los trabajos concernientes a solucionar las fallas en el tendido eléctrico, sino también que abarcaba lo relativo a las medidas de seguridad adoptadas en la vía pública.

También se encuentra probado que S.H.A. estuvo, al menos, en los inicios de los trabajos llevados adelante en la Av. Dasso y que supervisó lo relativo a las medidas de seguridad dispuestas en la calzada, medidas que las encontró correctas, según lo declarara en oportunidad de prestar declaración en los términos del artículo 308 del C.P.P., por lo que su responsabilidad en el hecho emerge claramente en consideración a lo expuesto hasta el presente.

Y no enerva la misma, el hecho que luego de su participación en aquella primigenia inspección pudieran haber intervenido otras personas, por el caso, las que se encontraban afectadas al sector Mantenimiento de la empresa, pues ello a todo evento podría sumar más responsables en el injusto, pero nunca desvincular a S.H.A., desde que nada objetó en su momento al incumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en el protocolo de actuación de la propia empresa para la cual laboraba el encartado.

En cuanto a la calificación legal y la pena a imponer, por las razones expuestas en forma precedente con respecto al cojusticiable R.J.L., efectuando la misma valoración con respecto a atenuantes y agravantes, es que propongo la imposición de las mismas especies de pena y de monto que para el recientemente mencionado.

De otro lado y como decía al inicio del tratamiento del recurso interpuesto por el particular damnificado, la responsabilidad de R.A.P. en el hecho no se encuentra acreditada con la certeza apodíctica que requiere un pronunciamiento condenatorio, resultando de aplicación en su favor el principio "favor rei" consagrado en el artículo 1º del C.P.P..

Me explico. Sostuvo la representante de la Agencia Fiscal, Dra. Olga Herro, y al momento de alegar sobre la responsabilidad penal de R.A.P., según surge del acta de debate (ver fs. 762 vta./763) que no habiendo declarado el encartado en la oportunidad del artículo 308 del rito ni en el juicio, nada podía decir, por lo que para fundamentar el reclamo de condena, se remitiría a lo sostenido por la Sala II de esta Cámara cuando revocó el sobreseimiento dispuesto en la instancia de grado, citando lo expresado en aquella oportunidad por nuestros colegas en el Tribunal.

Dos cosas para señalar al respecto. La primera, que el ministerio público fiscal no efectuó ninguna valoración de la prueba colectada en el juicio y que resultase demostrativa de la responsabilidad de R.A.P. en el hecho, circunstancia ya marcada por el Dr. Sayago, defensor del encausado, al momento de alegar y que no mereciera réplica alguna por parte de la acusadora.

Y la segunda, no por ello de menor importancia, es que el grado de conocimiento acerca de la responsabilidad penal del imputado es muy distinto según la etapa del proceso que se transite, bastando para la elevación a juicio de la causa la existencia de probabilidad positiva, mientras que se requiere certeza para el dictado de una condena en su contra. Nada de ello fue alegado por la Agencia Fiscal.

Se sostuvo en el fallo impugnado y como fundamento para eximir de responsabilidad al coimputado R.A.P., que su trabajo en la obra ya había terminado, pues el hormigón estaba hecho, según se advierte con las fotografías existentes en la causa, por lo que habiendo finalizado con sus trabajos, aquel ninguna responsabilidad tenía en el accidente sufrido por J.F.F..

No se encuentra controvertido que la carpeta de hormigón se había realizado, tal como lo ilustra la fotografía de fs. 33, y que el vallado en el lugar seguía colocado, estando pendiente de habilitación al tránsito la calzada, en virtud del "curado" que se realiza a aquella.

Sobre esta circunstancia se asienta el reclamo del particular damnificado, pues entiende que encontrándose pendiente la liberación de la calzada, pervive la responsabilidad del responsable de los trabajos realizados sobre la misma.

Ahora bien. Como cuestión previa al análisis si resulta invocable por parte de R.A.P. el principio de confianza, pues existiendo la intervención previa de dos empresas en la obra, con el personal calificado correspondiente -ingenieros S.H.A. y R.J.L.-, aquel bien pudo tener razones para confiar que las medidas de seguridad dispuestas en el lugar eran las pertinentes, corresponde resolver si al tiempo en que se produjo el hecho, la vinculación de R.A.P. con la obra se mantenía vigente o ya había cesado.

Y sobre dicha interrogación, existe en mi sentir una duda insuperable que torna viable la aplicación del principio "favor rei", pues encontrándose probado que el hormigón se había efectuado y realizado el "curado" del mismo por parte de la empresa "EJ CONSTRUCCIONES", no se ha acreditado que la liberación de la calzada al tránsito con la remoción del vallado correspondiente, dependiese de una decisión de R.A.P., pues bien podía ser que aquella decisión fuese tomada por la firma INTEL S.R.L, circunstancia sobre la que nada se dijo en el juicio, según se desprende del acta de debate y de la sentencia en crisis, como así tampoco surge de los dichos de R.J.L. en su declaración de fs. 277/279.

Si los trabajos de R.A.P. habían culminado, es evidente que ninguna responsabilidad tiene en el hecho. Por el contrario, si se hubiese probado en el juicio que la intervención de aquel no había cesado, pues de él dependía la liberación del tránsito, distinta sería la situación y correspondería analizar su responsabilidad a la luz

del señalado principio de confianza.

La duda referenciada, me persuade a sostener la aplicación del "favor rei" consagrado en el artículo 1º del C.P.P. y por ende, confirmar el pronunciamiento dictado en la instancia de grado por el cual se absolvió de culpa y cargo a R.A.P..

En cuanto a la pena a imponer al coprocesado S.H.A., corresponde señalar que en el pedido formulado por el ministerio público fiscal se solicitó la fijación de la misma para los tres encartados en un año y seis meses de prisión y dos años de inhabilitación especial, valorando como atenuante la carencia de antecedentes penales y como agravante la peligrosidad demostrada por los imputados.

En el fallo impugnado la agravante de mención fue descartada por la magistrada de grado, quien fijó la pena del coimputado R.J.L. en quince mil pesos de multa e inhabilitación especial para ejercer la profesión de ingeniero electricista por el término de dieciocho meses, debiendo reducirse esta última según lo expuesto supra, a un año.

La pena mencionada no fue recurrida por la Agencia Fiscal, por lo que no encuentro mérito entonces, teniendo en cuenta la inexistencia de antecedentes penales, para apartarme de la multa de pesos quince mil e inhabilitación especial por el término de un año para ejercer la profesión de ingeniero por parte de S.H.A., con más las costas del proceso, por considerarlo autor penalmente responsable del delito de lesiones graves culposas, en los términos del artículo 94 del Código Penal.

Previo a finalizar el contenido de mi sufragio y siendo numerosas las obras que he advertido -por mi parte- que se encuentran en la misma situación que la que originara las lesiones de este proceso, como (por sólo citar algunos ejemplos) las que se llevaron adelante hasta estos días en calles del micro y macrocentro de esta ciudad (vías que poseen gran tránsito y menos posibilidad de "esquive", que la de estos obrados) como -por sólo dar algunos ejemplos- las citas en las intersecciones de calles Darregueira y Fitz Roy, la de Berutti esquina Roca, y las que comprenden la

semipeatonalización de calle Alsina (entre Soler y Dorrego) propongo dar conocimiento de lo expuesto (con remisión de este fallo y del de primera instancia) a la Municipalidad de Bahía Blanca y al Concejo Deliberante de este medio a los fines que se estimen corresponder.

Así lo voto.

**A LA MISMA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI, DICE:** Adhiero al sentido del voto precedente por idénticos fundamentos.

**A LA SEGUNDA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. SOUMOULOU, DICE:** Teniendo en cuenta el resultado alcanzado al tratar la cuestión anterior, corresponde hacer lugar parcialmente a los recursos interpuestos por los Dres. Diskin y Saez.

En consecuencia se condena a R.J.L. y S.H.A. como autores penalmente responsables del delito de lesiones culposas graves, en los términos del artículo 94 del Código Penal, a la pena de quince mil pesos de multa e inhabilitación especial para ejercer la profesión de ingeniero por el término de un año, con más las costas del proceso. Por otro lado se confirma la absolución dispuesta respecto del coimputado R.A.P. (arts. 209, 210, 440, 441, 442 y concs. del C.P.P.).

Así lo voto.

**A LA MISMA CUESTIÓN EL SR. JUEZ DR. BARBIERI, DICE:** Sufrago en el mismo sentido.

Con lo que terminó el acuerdo que firman los señores jueces nombrados.

## **S E N T E N C I A**

Bahía Blanca, 20 de Septiembre de 2.018.

**Y Vistos; Considerando:** Que en el acuerdo que antecede, ha quedado resuelto: que es parcialmente justa la sentencia apelada de fs. 774/795.

Por esto y los fundamentos del acuerdo que precede este **TRIBUNAL RESUELVE:** Condenar a los coprocesados S.H.A. y R.J.L., como autores penalmente responsables del delito de lesiones culposas graves, en los términos del artículo 94 del Código Penal, a la pena de quince mil pesos de multa e inhabilitación especial para ejercer la profesión de ingeniero por el término de un año, con más las costas del proceso.

Asimismo se confirma la absolución dispuesta respecto del coimputado R.A.P. (arts. 209, 210, 440, 441, 442 y concs. del C.P.P.).

Librar comunicaciones a la Fiscalía General, a la Defensoría General, a los Defensores Particulares y al Particular Damnificado.

Asimismo librar oficio a la Municipalidad de Bahía Blanca y al Concejo Deliberante con copia de este resolutorio y del dictado en primera instancia a los fines que se estimen corresponder.

Remitir el expediente civil oportunamente requerido agregando copia de este pronunciamiento.

Hecho, devolver a la instancia de origen donde deberá anoticiarse a los tres cojustificables.